

Hágase saber; publíquese, y previa citación fiscal, elévense los autos á la Corte Suprema de Justicia.

Lo decretó y firmó el C. Juez 2º de Distrito Lic. José María Canalizo. Doy fé.—*José María Canalizo.*—*Manuel M. de Chavero*, secretario.

Es copia. México, Junio 26 de 1873.
Manuel M. de Chavero, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 21 de 1873.—Visto el recurso de amparo que con fecha 14 de Mayo último promovió en esta Capital ante el Juez 2º de Distrito, Quirina Ramirez por su esposo Nicolás Bautista, contra la determinación del C. Ministro de la Guerra que consignó á éste al servicio de las armas sin su consentimiento en el Batallón de línea número 15, violándose en su persona la garantía que otorga el artículo 5º de la Constitución federal. Vistas las constancias de autos y la sentencia del Juez de Distrito que concedió al quejoso el amparo pedido, en virtud de estar justificada la legalidad de su queja, pues de esas constancias aparece comprobado; que si pudo verificarse en el mes de Enero del año próximo pasado la consignación de Bautista al servicio de las armas sin su consentimiento, durante la ley que concedió facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, no subsistiendo hoy esa ley, y estando Bautista en el pleno goce de la garantía individual á que se refiere el artículo constitucional que cita su esposa para fundar el presente recurso, la retención actual de aquel en el expresado Batallón, constituye la violación en su persona de esa misma garantía.

Por lo expuesto, y con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: se confirma la sentencia que pronunció el Juez segundo de Distrito de esta Capital á 20 de Junio último, declarando:

TÓMÓ IV.—PÁRTE II.

que la Justicia de la Unión ampara y protege á Nicolás Bautista, contra el acto por el cual se le retiene en el servicio de las armas sin su consentimiento en el Batallón de línea número 15, con violación en su persona de la garantía que concede el artículo quinto de la Constitución federal.

Devuélvanse las actuaciones al juzgado de Distrito que las elevó en revisión, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 26 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Zacatecas por el C. Cruz Ortiz, contra su consignación al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dico: que en 16 del actual, Cruz Ortiz, originario de ciudad García y vecino de esta, manifiesta: que hace ocho días que la gefatura política de este Partido, sin saber el motivo del procedimiento y sin que pueda adivinarlo, lo consignó al batallón número 24 del ejército federal, separándolo de sus ocupaciones y del

lado de su familia á quien sostiene con los muy escasos recursos que le produce su trabajo personal, y que durante esos ocho dias ha agotado todo género de súplicas, moviendo cuantos recursos han estado á su alcance, para libertarse del servicio personal á que se le sujeta contra su voluntad; y habiendo sido inútiles todas sus agencias, está en el caso de distraer la atención de los tribunales, notando que la ley de 28 de Mayo de 1869, y su reglamento de 10 de Junio siguiente, no establecen otro medio que el enganche y el sorteo, para cubrir las bajas del ejército; y siendo el hecho de que se queja, que la gefatura citada lo consignó al servicio de las armas infringiendo en su persona la garantía consignada en el artículo quinto de la Constitución federal; por lo que cree de Justicia y de conformidad con la ley de 20 de Enero del año citado, pide al Juzgado se sirva declarar: que la Justicia de la Union lo ampara y protege contra la órden de la gefatura política del Partido que lo consignó al servicio de las armas contra su voluntad, librando la órden de suspensión provisional del acto reclamado, en virtud de la justicia que le asiste y que en los momentos en que formula su solicitud, emprende la marcha en el cuerpo á que le ha agregado.

Suspense el acto expresado por auto de la misma fecha, se mandó comunicar la providencia al C. capitán José María Bejar, para que inmediatamente pusiera en libertad al quejoso y se remitiera copia de su ocurso al C. jefe político de esta Capital, para que dentro de tercerodia, informara con justificación sobre su contenido, corriéndose en seguida traslado al que suscribe para que pidiera sobre lo principal. En 17 de este mes se proveyó se agregara el oficio de esa fecha del C. capitán Bejar, sacar copia de él y agregarse al juicio promovido por Cruz Alvarado y Nicolás Enriquez; y que teniendo el Juzgado noticia de que el paquete en que se agregó á Cruz Ortiz se había dirigido á Colotlan, se librara atento oficio al C. ge-

neral Sostenes Rocha, jefe de la tercera division, para que se sirviera en nombre de la soberanía nacional, dar cumplimiento al auto del dia 16, del cual no aparece contestacion ninguna.

Examinando el informe pedido, el C. jefe político, manifiesta: que como expresa en su solicitud de amparo Cruz Ortiz, fué consignado al servicio de las armas, de conformidad con lo dispuesto por el gobierno del Estado en comunicacion de 19 de Febrero último, de que acompaña copia certificada, y que como Ortiz era hombre del todo nocivo á la sociedad, lo creyó comprendido en la órden del Gobierno supremo.

Por lo expuesto, y no siendo el modo de cubrir las bajas del ejército la leva que dispone el gobierno del Estado en la circular de 19 de Febrero, en vez del enganche y el sorteo que establecen la ley de 28 de Mayo de 1869 y su reglamento de 10 de Junio siguiente. Considerando: que no está demostrado conforme al derecho comun, que Ortiz sea pernicioso á la sociedad, sin que haya ningunos datos ni pruebas en su contra, para que se impusiera por la autoridad política la pena verdadera de consignarlo al servicio de las armas en los cuerpos del ejército como reemplazo y contra su voluntad y consentimiento, causándole tambien los daños de que se queja con justicia, por lo que el Promotor fiscal, encontrando en el acto reclamado violado el artículo quinto de la Constitución federal y las leyes que de ella emanan, pide de conformidad con lo dispuesto por la ley orgánica de esta clase de juicios, se declare: que la Justicia de la Union ampara y protege á Cruz Ortiz, contra el acto de la gefatura política que lo consignó al servicio militar con infracción de aquellas leyes y de la fundamental. Así lo estima de justicia y derecho.—Firmado: —*Jesus M. Licona.*—Zacatecas, 21 de Junio de 1873.

Es copia. Zacatecas, Junio 28 de 1873.
—*Jesus M. Licona.*

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Zacatecas, Julio 3 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por Cruz Ortiz, contra el C. Gefe político de esta Ciudad que lo consignó al servicio de las armas en el Batallon número 24 del Ejército Nacional, violando con ese hecho la garantía que protege el artículo quinto de la Constitución general. Visto el auto por el que se mandó suspender provisionalmente el acto que se reclama; el informe de la autoridad responsable, que se funda en la circular de 19 de Febrero del corriente año; lo pedido por el C. Promotor; la citacion para sentencia y demas constancias de estos autos: Considerando: que están justificados los hechos reclamados en el juicio, y que estos constituyen una violacion manifiesta de la garantía que otorga el artículo quinto de la citada Constitución general, porque no es bastante la circular de 19 de Febrero que se ha mencionado para derogar la ley general de 28 de Mayo de 1869 y su reglamento de 10 de Junio del mismo año; de conformidad con los anteriores fundamentos, lo pedido por el C. Promotor y lo dispuesto en la ley de 20 de Enero del repetido año de 1869, sentenciando definitivamente este juicio, el Juzgado resuelve.

Que se desista del servicio de las armas en el Batallon número 24 del ejército con ello en su persona la garantía que el artículo quinto de la Constitución general.

Que se devuelvan sus actuaciones al Juzgado con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; los periódicos y archívense a

arón por unanimidad de vocalistas y Ministros que formal pleno de la Corte Suprema de los Estados Unidos Mexicanos.—*José M. Iglesias.*—*Pedro J. de la Garza.*—*José Artaga.*—*Pedro Orta.*—*Manuel de Cár-*

sion á la citada Suprema Corte de Justicia; publíquese esta sentencia en el Periódico Oficial del Estado, y sáquense las copias respectivas para el Semanario Judicial. Hágase saber.

El O. Juez de Distrito del Estado lo decretó y firmó. Doy fé.—firmado.—*Manuel G. Solana.*—*Luis G. Chavez.*

Ha copia que certifico. Zacatecas, Julio 3 de 1873.—*Luis G. Chavez*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 21 de 1873. Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas por Cruz Ortiz contra el prefecto político de esa Ciudad que lo consignó al servicio de las armas, y considerando: que en el expediente aparece que se ha vulnerado en la persona del quejoso la garantía á que se refiere el artículo 5º de la Constitución federal, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio, el 3 del actual, por el Juez de Distrito de Zacatecas, que declara: que la justicia de la Union ampara y protege á Cruz Ortiz contra los actos de la Prefectura política que lo consignó al servicio de las armas.

Primero: Que la Justicia de la Union ampara y protege á Cruz Ortiz contra los actos de la Prefectura política de la Capital que lo consignó al servicio de las armas en el Batallon número 24 del Ejército, violándose con ello en su persona la garantía que señala el artículo quinto de la Constitución general.

Segundo: Se hace al C. Promotor fiscal el mas sério apercibimiento por no haber presentado su alegato como lo previene el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de 9 de Octubre del año próximo pasado, siendo las obligaciones de su encargo, no un derecho propio que puede renunciar, sino oficio que desempeña por ministerio de la ley.

Tercero: Remítanse estos autos en revi-

armas en el Batallon número 24 del ejército con ello en su persona la garantía que el artículo quinto de la Constitución general.

Devuélvanselos autos con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; los periódicos y archívense a su vez el Toca

Así lo decretó la Suprema Corte de Justicia. Procurador General de la Republica.—*Manuel de Cár-*

tañeda y Nájera.—José M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velasquez.—José García Ramirez.—Luis Aguilar, secretario.

Es copia. México, Julio 23 de 1873.—Lic. Enrique Landa, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito de Zacatecas por el Dr. D. Fernando Gomez Virgen, contra la providencia dictada por la Gefatura política de la Capital de ese Estado, en virtud de la que se suspendió al quejoso del empleo de médico de la Municipalidad.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Al Juzgado de Distrito.—El Promotor fiscal dice: que en cuatro del actual se presentó el C. Doctor Fernando Gomez Virgen, por medio del ocuro de fojas cuatro á la seis vuelta, exponiendo: que hace cinco años que le fué conferido el nombramiento de médico de esta municipalidad y administrador de la vacuna, cuyo empleo ha desempeñado con el osmero y eficacia que le ha sido posible hasta el dia primero del presente mes, en que el C. Cruz García Rojas, actual Gefe político del Partido, le impuso la pena de suspension ilimitada de su empleo, como consta de la comunicacion núm. 1; y que el motivo de la aplicacion de esta pena fué, que habiéndosele prevenido por el C. García Rojas, en su comunicacion de 31 de Mayo que acompaña bajo el número 2, para que inmediatamente lo informase del estado en que se encontró la salubridad pública durante el dicho mes, á la que contestó en los términos que constan en la copia número 3, demostrándole que le era imposible rendir inmediatamente el informe que se servia pedirle; y que esa nota fué califi-

cada por dicho Gefe político de irrespetuosa, puesto que en su oficio de primero del corriente, motiva la pena dicha en que no puede permitir el lenguaje desconocido é impropio en que está concebida su contestacion; y aunque puede ser que haya empleado términos que no sean de la mas completa sumision, sin mas objeto que el de conservar incólume la dignidad individual, puede ser tambien que el C. Gefe político haya sido demasiado severo en su calificacion, por ser público en esta ciudad que á su advenimiento al puesto que hoy ocupa, habian mediado algunos antecedentes que lo tenían indispuerto contra su persona; pero que sea de esto lo que fuere, el hecho capital é inegable á que se refiere en su solicitud, es el de habérsele aplicado por el Sr. García Rojas, la pena de destitucion indefinida de su empleo de médico de la municipalidad y administrador de la vacuna, y como con ella se ha violado una de las garantías individuales que protege la Constitucion general de la República, que ratifica y sanciona la particular del Estado en su artículo primero, se ve en el caso, usando del derecho mas legítimo, de ocurrir á la Justicia federal pidiendo amparo contra la determinacion de la Gefatura política que le impuso la pena referida, pues con ella se ha violado la garantía del artículo 21 del pacto fundamental de la República que establece, "que la aplicacion de las penas propiamente tales, es exclusiva de la autoridad judicial;" cuya determinacion absoluta y caracterizada por el adjetivo "exclusiva," es como el corolario del otro principio fundamental consignado en el artículo 50 que dice: "El Supremo Poder de la Federacion se divide para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial: nunca podrán reunirse dos ó mas de esos poderes en una sola persona ó corporacion, ni depositarse el Legislativo en un individuo;" y que será delincuente si se quiere; pero la pena que deba aplicársele solo puede serlo por la autoridad judicial, pues la privacion de empleo es una pena como lo dicen las mas elemen-